

# BOLETÍN JURISPRUDENCIAL No. 06 SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2023

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA



---

## Magistrados

Dra. Nelcy Vargas Tovar

Dr. Enrique Dussán Cabrera

Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Dr. Jorge Alirio Cortes Soto

Dr. José Miller Lugo Barrero

Dr. Ramiro Aponte Pino

## Relator

Dr. Danny Joan Guevara Silva

---

# TABLA DE CONTENIDO

## ACCIÓN DE TUTELA

Rad. 41 001 33 33 003 2023 00199 01 Derecho a la Salud y Vida en Condiciones Dignas – Servicio de Atención Domiciliaria por Enfermería	<a href="#">pág. 4</a>
Rad. 41 001 33 33 003 2023 00200 01 Derecho al Transporte y Viáticos en el Sistema de Salud	<a href="#">pág. 6</a>
Rad. 41 001 33 33 008 2023 00181 01 Calificación de la Junta Médico Laboral	<a href="#">pág. 8</a>
Rad. 41 001 33 33 004 2023 00198 01 Reconocimiento de Incapacidades Laborales	<a href="#">pág. 10</a>
Rad. 41 001 33 33 009 2023 00218 01 Corrección Historia Laboral / Requisitos de la Acción de Tutela para Amparar Derechos Pensionales	<a href="#">pág. 12</a>
Rad. 41001 33 33 005 2023 00211 01 Requisitos de la Acción de Tutela para Amparar Derechos Pensionales / Pensión de Sobrevivientes	<a href="#">pág. 14</a>
Rad. 41 001 33 33 008 2023 00254 01 Acción de Tutela Ordena el Cumplimiento de Sentencia Judicial	<a href="#">pág. 16</a>
Rad. 41 001 33 33 001 2023 00235 01 Nombramiento de Lista de Elegibles en Concurso de Méritos de la Dian	<a href="#">pág. 18</a>

## HABEAS CORPUS

Rad. 41 001 23 33 003 2023 00276 01 Internación del Accionante en Unidad Mental no Deviene en Privación Ilegal o Inconstitucional de su Libertad / Paciente Requiere Atención Especializada	<a href="#">pág. 20</a>
--	-------------------------

## NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Rad. 41 001 33 33 004 2016 00052 02 Contrato Realidad / Elementos no Acreditados / Auxiliar de Enfermería / Subordinación no Demostrada	<a href="#">pág. 22</a>
Rad. 41 001 33 33 007 2018 00326 01 Sustitución Pensión Gracia a Compañero Permanente / Convivencia Efectiva Durante los Últimos 5 Años Acreditada	<a href="#">pág. 24</a>
Rad. 41 001 23 33 000 2016 00009 00 Impuesto Sobre la Renta / Derecho a Deducción de Aportes a Fondos de Pensiones sin Sujeción al Artículo 107 E.T.	<a href="#">pág. 26</a>

Rad. 41 001 33 33 009 2018 00412 01  
Contrato Realidad / Elementos Acreditados / Auxiliar de Enfermería [pág. 28](#)

**REPARACIÓN DIRECTA**

Rad. 41 001 33 31 001 2012 00072 01  
Falla del Servicio por Violaciones a Deberes Funcionales de Origen Convencional / Ejecución Extrajudicial / Inexistencia de Culpa Exclusiva de la Víctima [pág. 30](#)

Rad. 41 001 33 33 002 2018 00014 01  
Accidente de Tránsito / Hueco en la Vía / Concurrencia de Culpas 50% [pág. 32](#)

Rad. 41 001 33 33 004 2015 00291 02  
Enriquecimiento sin Causa en la Jurisdicción Contencioso Administrativo / No Acreditación de Requisitos / Gestión de Conservación de Archivo a Motu Proprio y por Obligación Legal [pág. 34](#)

Rad. 41 001 23 33 000 2019 00339 00  
Construcción Hidroeléctrica El Quimbo / Adquisición de Predios / Enriquecimiento sin Justa Causa / Lesión Enorme / Caducidad Probada [pág. 36](#)

Rad. 41 001 33 33 002 2016 00480 01  
Responsabilidad por Daños Sufridos por Menor en Accidente en Centro a Cargo del ICBF / Daño a la Salud no Procede a Favor de Padres, solo Víctima Directa / Inexistencia de la Culpa Exclusiva de la Víctima [pág. 38](#)

**ACCIÓN DE REPETICIÓN**

Rad. 41 001 33 33 005 2017 00108 01  
Elementos Acreditados / Culpa Grave del Agente / Lesiones con Arma de Dotación Oficial / Disparos con Fusil en Forma Imprudente [pág. 40](#)

**CONTROVERSIA CONTRACTUALES**

Rad. 41 001 23 33 000 2014 00542 00  
Ruptura del Equilibrio Económico del Contrato no Acreditada / Sobrecostos por Mayor Permanencia de Obra no Acreditados / Ampliación del Plazo no Afectó la Ecuación Económica del Contrato [pág. 42](#)

**ACCIÓN DE GRUPO**

Rad. 41 001 23 33 000 2013 00240 00  
Falla del Servicio por Incautación y Destrucción de Arroz no Probada / Propiedad del Arroz y Daño Antijurídico no Demostrados / Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [pág. 44](#)



Magistrado Ponente:	Gerardo Iván Muñoz Hermida
Instancia:	Segunda
Radicación:	41 001 33 33 003 2023 00199 01
Accionante:	Faustino Buitrago Romero agenciado por Elvira Villareal de Buitrago
Accionado:	Dirección de Sanidad de la Policía Nacional Unidad Prestador de Salud del Huila
Fecha:	05 de septiembre de 2023

## DERECHO A LA SALUD Y VIDA EN CONDICIONES DIGNAS – SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA POR ENFERMERÍA

### Problema Jurídico

“Corresponde a la Sala establecer en si existe vulneración a los derechos fundamentales a la salud y vida digna del señor FAUSTINO BUITRAGO ROMERO, por parte de la Unidad Prestadora de Salud Huila de la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, por la suspensión en la prestación del servicio domiciliario de enfermería por 12 horas diurnas de lunes a sábado por 4 meses que le fuera prescrito por la Junta Médica de Rehabilitación que le fue realizada el 24 de marzo de 2023.”

### Extracto

“Teniendo en cuenta la situación fáctica previamente expuesta, se acredita que el estado de salud del señor Faustino Buitrago Romero se encuentra seriamente afectado por varias enfermedades de base, circunstancias que ha llevado a que conforme el índice de Barthel, sus médicos tratantes hayan determinado que es una persona dependiente totalmente, condición, que adicional a su avanzada edad (82 años) lo califica como un sujeto de especial protección constitucional.

Y tomando como referente el precedente jurisprudencial de la H. Corte Constitucional, considera la Sala, que la entidad accionada debe proporcionar el servicio de enfermería domiciliaria, 12 horas al día, diurnas, de lunes a sábado, conforme lo dispuso la Junta Médica de Rehabilitación del Establecimiento de Sanidad Policial Clínica DEUIL de la Unidad Prestadora de Salud Huila, por cuanto fueron los profesionales de la salud adscritos a la entidad accionada quienes lo prescribieron y de las anotaciones en la historia clínica, se desprende claramente que el agenciado debe tener un acompañamiento permanente, por tener dependencia funcional total por sus padecimientos y ante su avanzada edad. Adicionalmente,

debe precisarse a la entidad accionada que corresponde al médico tratante determinar los procedimientos y servicios que requiere el accionante, advirtiéndose que el servicio prescrito por los profesionales de la salud que integraron la Junta de Rehabilitación (médico general - fisiatra – fisioterapeuta – trabajadora social y enfermera jefe) fue el de enfermería y no el de cuidador.

(...)

De igual manera, la Sala indica que dado el complejo estado de salud del señor Faustino Buitrago Romero, los cuidados diarios que requiere desborda aquellos que podría ofrecerle su familia, pues el servicio ordenado en el domicilio del paciente se prescribe a cargo de personal experto en “enfermería”, “necesidades clínicas por sonda nasogástrica” y en “terapias”, dada la **“pérdida funcional total”** que aqueja al paciente; por lo que resulta necesario un personal con conocimientos específicos en estas áreas de la salud y no simples cuidados familiares, que aun que son importantes deben ser apoyados por los profesionales indicados por el médico tratante, en la cantidad y periodicidad que fueron prescritos.

(...)

Por lo anterior, considera esta Corporación que, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional – Unidad Prestadora de Salud Huila – al suspender el servicio de enfermería que le fuera prescrito al señor Faustino Buitrago Romero debido trámites administrativos, específicamente temas contractuales, se opone a los principios de accesibilidad, universalidad, pro homine, equidad, y oportunidad, al no brindar todo aquello requerido para el manejo de los padecimientos que lo aquejan; conculcando los derechos de acceso oportuno y con calidad que se derivan del derecho fundamental a la Salud del accionante.

(...)

Así las cosas, se hace necesario MODIFICAR el ordinal SEGUNDO del fallo de primera instancia en el sentido de ordenar a la JEFE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DEL HUILA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, Capitán MONICA MARIA MOJICA SERRANO, de proporcionar de manera efectiva el servicio de atención domiciliaria por enfermería, 12 horas diurnas, de lunes a sábado, conforme lo ordenado por la Junta Médica de Rehabilitación en valoraciones realizadas el 23 de marzo de 2023 y el 11 de agosto de 2023, hasta cuando se reúna la Junta Médica de Rehabilitación y emita nuevo concepto al respecto.”

[Sentencia del 05 de septiembre de 2023, M.P: Gerardo Iván Muñiz Hermida, radicación: 41001333300320230019901](#)



**Magistrado Ponente:** Jorge Alirio Cortés Soto  
**Instancia:** Segunda  
**Radicación:** 41 001 33 33 003 2023 00200 01  
**Accionante:** Jhoset Martín Puentes Jiménez  
**Accionado:** Dirección de Sanidad Ejército - Establecimiento Sanidad Militar Batallón ASPC No. 9 CACICA GAITANA  
**Fecha:** 05 de septiembre de 2023

## DERECHO AL TRANSPORTE Y VIÁTICOS EN EL SISTEMA DE SALUD

### Problema Jurídico

“Se plantea a la Sala decidir:

- i) Por falta de legitimación en causa por pasiva, en cuanto no tienen competencia para garantizar la atención médica ni para la asignación de citas médicas en el Hospital Militar ¿Debe modificarse el fallo recurrido para desvincular al Establecimiento de Sanidad Militar del Batallón ASPC No. 9 y a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional?
- ii) ¿Se acreditaron las condiciones para que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional suministre el pago de transporte, alojamiento y alimentación, para el actor y su acompañante?

El Tribunal considera que debe confirmarse la sentencia recurrida, pues las partes tienen legitimación en causa por pasiva y se encuentran acreditadas las condiciones para que deban asumir el pago de transporte, alojamiento y alimentación del menor y un acompañante. Lo anterior, sustentado en el análisis de a) la legitimación en causa por pasiva y b) el derecho al transporte y viáticos en el sistema de salud.”

### Extracto

“(…) [L]as entidades promotoras de salud están llamadas a garantizar el servicio de transporte y estadía, cuando los pacientes se encuentren en las siguientes circunstancias: i) que el procedimiento o tratamiento se considere indispensable para garantizar los derechos a la salud y a la vida de la persona; ii) que ni el paciente ni sus familiares cercanos tengan los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y iii) que de no efectuarse la remisión se ponga en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario.



A su vez, en los casos en que el actor afirme no contar con los recursos necesarios para sufragar los costos asociados a los servicios aludidos (negación indefinida), la Corte Constitucional ha señalado que se invierte la carga de la prueba, correspondiendo a la entidad accionada demostrar lo contrario. (...)

Si bien la Dirección General de Sanidad Militar señaló que el menor Jhoset Martín cuenta con los recursos económicos para asumir el traslado a Bogotá y recibir los servicios médicos que se le van a prestar allí, pues su padre es pensionado del Ministerio de Defensa Nacional por haberse desempeñado como técnico de servicios y tiene un deber de solidaridad para con su hijo, no indicó el monto de dicha pensión para sopesar su capacidad económica.

Por su parte, la agente oficiosa del menor, indica que los pocos recursos que percibe se gastan en su manutención y no está en la capacidad de soportar los costos que implican el desplazamiento a ciudades distintas; así las cosas, los argumentos ofrecidos por la entidad accionada no justifican la capacidad económica del menor o su familia, por cuanto no relaciona los ingresos mensuales del señor José Eduardo Puentes Puentes (padre del menor) y el hecho de que sea pensionado no asegura que pueda suplir el transporte para cada uno de los servicios a los que deba asistir en otra ciudad.

Es que, debe considerarse que en los servicios autorizados se encuentran múltiples terapias de fonoaudiología, que deberán atenderse con la periodicidad que indique la profesional y, por la minoría de edad debe asistir con un acompañante, lo que implica un gasto significativo para una familia que, como lo ha manifestado, percibe ingresos apenas suficientes para su manutención derivados de la pensión del señor Puentes Puentes, por eso, no hay lugar a acoger los argumentos de la parte accionada y se confirmará la decisión.”

[Sentencia del 5 de septiembre de 2023, M.P: Jorge Alirio Cortés Soto, radicación: 41001333300320230020001](#)



<b>Magistrado Ponente:</b>	Ramiro Aponte Pino
<b>Instancia:</b>	Segunda
<b>Radicación:</b>	41 001 33 33 008 2023 00181 01
<b>Accionante:</b>	María del Carmen García Ordoñez agente oficioso de JUAN BAUTISTA DUQYE JAVELA
<b>Accionado:</b>	Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y Departamento de Policía del Huila
<b>Fecha:</b>	12 de septiembre de 2023

## CALIFICACIÓN DE LA JUNTA MÉDICO LABORAL

### Problema Jurídico

“Se contrae a establecer si es procedente ordenar que el actor sea valorado nuevamente por la Junta Médica Laboral (teniendo en cuenta que fue valorado antes de retirarse de la institución), si el costo de la valoración debe asumirla la entidad accionada y si el término otorgado para cumplir el fallo es razonable.”

### Extracto

“Tomado como marco de reflexión el precedente jurisprudencial citado ad supra; considera la Sala, que aunque el actor esté retirado del servicio y perciba la respectiva asignación de retiro (no generada por invalidez); está asistido del derecho a que la Junta Médico Laboral le practique una nueva valoración; porque como ya quedara expuesto, antes de retirarse le diagnosticaron un “cuadro depresivo ansioso” (acta 109-2000 del 13 de septiembre de 2000) y en la consulta de control con el psiquiatra de la institución realizada el 17 de enero de 2023, le diagnosticaron “demencia no especificada”.

De suerte que se requiere establecer si se trata de una patología susceptible de evolución paulatina o de un desarrollo posterior al retiro.

En ese orden de ideas, se confirmará el fallo impugnado, pero siguiendo la orientación de la H. Corte Constitucional se ordenará a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, que durante un término de 2 días contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a autorizar y convocar una Junta Médico Laboral; que deberá expedir una calificación de la pérdida de capacidad laboral del accionante en el término máximo de 1 mes, a partir de su conformación.



La calificación de pérdida de capacidad laboral que se realice en cumplimiento de este fallo debe ser integral y contener los elementos mínimos de este tipo de dictámenes, particularmente: (i) el origen y porcentaje de la pérdida de capacidad psicofísica; (ii) precisar la fecha de estructuración; y, (iii) establecer los elementos que permitan determinar el posible deterioro de sus condiciones de salud.

En lo relacionado con la capacidad económica de la agente oficiosa y la actividad de conducción que se aduce realizaba el agenciado; es pertinente resaltar, que el simple hecho de ser propietaria de un inmueble, no es prueba de que perciba ingresos; amén de que el segundo hecho no tiene ninguna incidencia en el asunto litigioso.

Advierte la sala, que lo informando por la accionada, al indicar que se iniciaron las valoraciones médicas de psiquiatría y neurología, agendadas para el 18 y 31 de agosto de 2023, como conceptos necesarios para solicitar la Junta Médica Laboral; no superan la vulneración del derecho fundamental a la seguridad social del accionante, porque este requiere la valoración de forma urgente, debido a su debilidad manifiesta por su edad (69 años) y a la patología que lo aqueja (demencia no especificada)."

[Sentencia del 12 de septiembre de 2023, M.P: Ramiro Aponte Pino, radicación: 41001333300820230018101](#)



<b>Magistrado Ponente:</b>	Enrique Dussán Cabrera
<b>Instancia:</b>	Segunda
<b>Radicación:</b>	41 001 33 33 004 2023 00198 01
<b>Accionante:</b>	María Esperanza Suaza Puentes
<b>Accionado:</b>	ARL Positiva Compañía de Seguros
<b>Fecha:</b>	18 de septiembre de 2023

## RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDADES LABORALES

### Problema Jurídico

“Corresponde determinar si se vulneran los derecho fundamentales de la accionante al no habersele reconocido y pagado, por parte de la ARL Positiva las incapacidades objetadas con rechazo por parte de la ARL, correspondientes a los periodos del 18/08/2020 a 16/09/2020 correspondiente a 30 días, del 18/09/2020 al 07/10/2020 correspondiente a 20 días, del 08/10/2020 al 12/10/2020 correspondiente a 5 días, y del 13/10/2020 al 10/11/2020 correspondiente a 29 días, y sobre los que no hizo alusión el a-quo en la sentencia de primera instancia.”

### Extracto

“Como quedó establecido en la sentencia de primera instancia, el diagnóstico de síndrome de manguito rotatorio izquierdo, fue calificado como de origen laboral, por la EPS Sanitas según oficio ATEP 11503- 20 del 12 de noviembre de 2020, y confirmada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila con dictamen No. 13880 de fecha 13 de agosto de 2021, dictamen que se encuentra en firme según constancia expedida el 5 de noviembre de 2021 (pág. 30 a 34, índice 1, samai).  
(...)

Según lo expuesto por la ARL al contestar la demanda, estas incapacidades fueron objetadas en auditoría médica en razón a que las mismas corresponden al brazo izquierdo, y sobre ese diagnóstico no se encontraba en firma la calificación sobre el origen laboral de la enfermedad, lo que ya se encuentra desvirtuado en la presente acción de tutela, pues si bien en principio la ARL había presentado desacuerdo al origen de la calificación asignada por la EPS Sanitas (pág. 11 a 13, índice 12 samai), la Junta Regional de Calificación de Invalidez, confirmó el origen laboral de este diagnóstico con el dictamen 13880 del 13 de agosto de 2021, por lo que esta objeción se despacha desfavorable.

Respecto al argumento consistente en que ARL solo cancela las incapacidades expedidas con posterioridad a la calificación efectuada por la EPS como de origen laboral el 30 de octubre de 2020, la Sala advierte que las incapacidades reclamadas por la accionante si bien corresponden a periodos anteriores al 30 de octubre de 2020, estas en su integridad fueron expedidas por el diagnóstico de síndrome de manguito rotador izquierdo, y en consecuencia todas devienen del mismo diagnóstico que fue calificado de origen laboral, por lo que con independencia de la fecha de su expedición, al estar todas relacionadas con la misma patología, deben ser asumidas por la ARL Positiva.

A juicio de la Sala, contrario a lo expuesto por la ARL al contestar la tutela, el parágrafo 1 del artículo 1 del decreto 2943 de 2013 no establece que la obligación de las ARL se limite a las incapacidades emitidas después de efectuada la calificación de la enfermedad como laboral, pues de su tenor literal se desprende que las ARL reconocen las incapacidades desde el día siguiente de ocurrida la enfermedad diagnosticada como laboral, sin condicionar tal reconocimiento a la fecha de tal calificación del origen de la enfermedad, de tal suerte que si la enfermedad se califica como laboral, todas las incapacidades que se hayan emitido en virtud de dicha enfermedad, antes o después de la calificación, recaen en cabeza de la ARL.

Bajo esta línea de razonamiento, la Sala concluye que las incapacidades enlistadas al haber sido emitidas en virtud del diagnóstico de síndrome de manguito rotatorio calificado de origen laboral, deben ser reconocidas y pagadas por la ARL Positiva, y en consecuencia se adicionará el fallo de tutela en tal sentido.”

[Sentencia del 18 de septiembre de 2023, M.P. Enrique Dussán Cabrera, radicación: 41001333300420230019801](#)



<b>Magistrada Ponente:</b>	Nelcy Vargas Tovar
<b>Instancia:</b>	Segunda
<b>Radicación:</b>	41 001 33 33 009 2023 00218 01
<b>Accionante:</b>	José Jamid Perdomo Tello
<b>Accionado:</b>	Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y Otros
<b>Fecha:</b>	22 de septiembre de 2023

## CORRECCIÓN HISTORIA LABORAL / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA AMPARAR DERECHOS PENSIONALES

### Problema Jurídico

“Corresponde a la Sala, determinar en primer lugar, si se dan los presupuestos para establecerse la existencia de cosa juzgada en el proceso, previa verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. En caso negativo, se analizará si la acción de tutela resulta procedente específicamente para el reconocimiento de la pensión de vejez.

Consecuentemente, se determinará si las accionadas, vulneran los derechos fundamentales de petición, seguridad social y debido proceso del señor José Jamid Perdomo Tello, al no proferir respuesta de fondo frente a las peticiones de fecha 12 de mayo de 2022 (actualización historia laboral) y 10 de enero de 2023 (reconocimiento pensión de vejez), superándose el plazo legalmente establecido para dicho trámite, o sí, por el contrario, conforme a lo dispuesto por Colpensiones, se configuró un hecho superado y la decisión debe ser revocada. (...)”

### Extracto

“[P]rocede la Corporación a analizar, si la acción de tutela resulta procedente, específicamente, para el reconocimiento de la pensión de vejez, toda vez que el apoderado actor en el escrito de impugnación, solicita la modificación del fallo de primera instancia, en el sentido de ordenar a Colpensiones, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez del señor José Jamid Perdomo Tello.

Al respecto, se itera lo expuesto por la Corte Constitucional en cuanto a la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo para el reconocimiento de prestaciones económicas de carácter pensional, la cual es viable, cuando el accionante es una persona de la tercera edad o cuando por su condición particular, se encuentra en una situación de debilidad manifiesta.

Sobre el tema, al verificar los requisitos contemplados por la Corte Constitucional para la procedencia de la tutela en materia pensional, la Sala avizora, que el accionante no puede ser considerado como un sujeto de especial protección constitucional, pues no argumenta y menos prueba, tener alguna situación especial que así lo acredite, ni tampoco puede ser considerado persona de la tercera edad<sup>33</sup>, pues actualmente tiene 64 años, de manera que no supera la esperanza de vida certificada por el DANE en Colombia.

Adicionalmente, aunque el demandante arguye que, ante la falta de reconocimiento de su pensión de vejez se le esté afectando su derecho fundamental al mínimo vital, pues se encuentra desempleado, lo que ha dificultado el pago de sus obligaciones familiares y financieras, que acarrea la atención especial del hijo del accionante (Juan David Perdomo), quien padece de síndrome de Down<sup>35</sup>; sin embargo, no se puede soslayar que el accionante cuenta con una red de apoyo en cabeza de su esposa, de suerte que, no es posible concluir que la ausencia del reconocimiento de la pensión afecte la satisfacción de sus necesidades básicas o las de su familia.

Aunado a lo anterior, en el plenario se observa que actualmente al señor José Jamid Perdomo Tello, no se le ha definido la actualización de su historia laboral (peticiones de fecha 12 de mayo de 2022), por ende, existe una discusión frente a las semanas cotizadas, que previo al reconocimiento pensional debe definirse por parte de Colpensiones, de manera que, la solicitud de reconocimiento pensional en esta instancia, deberá ser desestimada.

Sobre este aspecto, del caudal probatorio se avizora que COLPENSIONES, efectivamente profirió la Resolución No. SUB 207933 del 8 de agosto de 2023, por la cual negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez al señor José Jamid Perdomo Tello, por no reunir el requisito de semanas cotizadas, pues cuenta con 1.132 y se requieren 1.300, la cual se notificó por correo electrónico al accionante.

De manera que, le asiste razón al quo, en cuanto a que Colpensiones a través de la Resolución No. SUB 207933 del 8 de agosto de 2023, no hizo alusión a las peticiones radicadas por el accionante el 12 de mayo de 2022, respecto de la actualización de la historia laboral del accionante.

(...)

En consecuencia, si bien es cierto, no es posible acceder a la solicitud de reconocimiento pensional deprecado, resulta necesario amparar los derechos fundamentales de petición, seguridad social y debido proceso del señor José Jamid Perdomo Tello en los términos de la sentencia impugnada, por lo que se procederá a su confirmación.”

[Sentencia del 22 de septiembre de 2023, M.P: Nelcy Vargas Tovar, radicación: 41001333300920230021801](#)



<b>Magistrado Ponente:</b>	José Miller Lugo Barrero
<b>Instancia:</b>	Segunda
<b>Radicación:</b>	41001 33 33 005 2023 00211 01
<b>Demandante:</b>	Carmen Ana Rodríguez Hernández
<b>Demandado:</b>	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
<b>Fecha:</b>	28 de septiembre de 2023

## REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA AMPARAR DERECHOS PENSIONALES / PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

### Problema Jurídico

“Como el a quo negó amparo constitucional solicitado y de acuerdo con los argumentos expuestos por la accionante en la impugnación, la Sala deberá resolver si ¿procede revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, proteger los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y debido proceso de la señora CARMEN ANA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, y ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes como cónyuge supérstite del causante Héctor Emiro Zúñiga Díaz (q.e.p.d.), la cual fue negada por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, mediante actos administrativos en firme?(...)”

### Extracto

“Conforme a lo visto, la Sala encuentra que la accionante no satisface todas las condiciones del Test de Procedencia, y por ello, no es posible acceder a lo pedido en la presente acción de tutela, al establecerse que la titular del derecho prestacional tiene a su alcance otro medio de defensa judicial, en el que deberá aportar los medios de prueba necesarios para cumplir con todos los requisitos legales que legitimen su derecho pensional, específicamente, demostrar el supuesto de la convivencia exigido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el cual establece como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: “a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; ...”

En efecto, pese a que la accionante de 64 años de edad, es considerada un adulto mayor y que, además se encuentra afiliada al Sistema General del Salud en el régimen

subsidiado, para la Sala no son pruebas suficientes para categorizarla dentro del grupo de personas de extrema vulnerabilidad, para efectos de analizar la eficacia de los medios o recursos judiciales con que formalmente cuenta, aunado a que no existe concepto médico alguno que dictamine su imposibilidad de trabajar o de ser autónoma e independiente y que además, cuenta con familiares cercanos que legalmente están obligados a suministrarle alimentos, en tanto que no se demostró que estuvieran imposibilitados económicamente para ayudar en su manutención y para cubrir sus necesidades básicas, siendo un deber de solidaridad derivado de la relación de consanguinidad que los une.

En tal medida, es menester indicar que jurisprudencialmente se ha determinado un requisito que se integra a la exigencia de subsidiaridad, y el cual debe encontrarse satisfecho a efectos de que resulte admisible entrar a analizar la procedencia para estos asuntos. En ese sentido, se ha destacado que es necesario que, de los hechos y pruebas allegadas al expediente, sea posible inferir **un nivel mínimo de certeza sobre la titularidad del derecho reclamado.** (...)

La Sala precisa que no se ha hecho especial referencia a la celebración del contrato civil de matrimonio entre el causante y la tutelante, suscrito el 7 de febrero de 2014, el cual se acreditó con el registro civil aportado bajo serial No. 579957431 , porque no es equivalente a la demostración del tiempo de convivencia en los términos de la Ley 100 de 1993 para efectos de acceder a la sustitución pensional, pues de ese acto civil no se deriva necesariamente que entre los cónyuges, haya existido una convivencia constante e ininterrumpida durante la totalidad del tiempo de la relación, pues pueden existir separaciones de hecho momentáneas que no necesariamente diluyen el vínculo creado o incluso convivencias simultáneas con más personas, aspectos que, sin duda, requieren específicas e idóneas pruebas y que sean sometidas a la contradicción que corresponde y posterior valoración judicial que sea del caso. (...)

En **resumen**: la Sala confirmará la decisión adoptada por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, en la cual se declaró improcedente el amparo invocado por la ciudadana Carmen Ana Rodríguez Hernández a sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y debido proceso, al no existir un mínimo de certeza respecto de la eventual configuración de los requisitos para el reconocimiento de la pensión reclamada por la accionante; y no comportarse tampoco una condición suficiente para valorar su situación como si se tratara de una persona de extrema vulnerabilidad.”

[Sentencia del 28 de septiembre de 2023, M.P: José Miller Lugo Barrero, radicación: 41001333300520230021101](#)





Magistrado Ponente:	Jorge Alirio Cortés Soto
Instancia:	Segunda
Radicación:	41 001 33 33 008 2023 00254 01
Demandante:	Eduardo Lara Sanmiguel
Demandado:	Dirección General de la Policía Nacional
Fecha:	05 de octubre de 2023

## ACCIÓN DE TUTELA ORDENA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL

### Problema Jurídico

“¿Debe revocarse el fallo recurrido, porque el Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales de la Policía Nacional no se encarga de reintegrar al demandante a la Policía Nacional y ya realizó actuaciones administrativas para cumplir con la sentencia de enero 23 de 2023, adicionada el 27 de junio del mismo año, en el proceso de radicado 41001-33-33-006-2015-00060-01?

El Tribunal considera que debe confirmarse la sentencia recurrida, pues al Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales le corresponde la ejecución de los fallos judiciales ordenados a la Policía Nacional, de lo cual hace parte la obligación de tramitar el reintegro del demandante al servicio de la entidad. Lo anterior, se sustenta en el análisis de la estructura funcional de la Policía Nacional para el cumplimiento de decisiones judiciales y el caso concreto.”

### Extracto

“Así las cosas, contrario a lo manifestado por el impugnante, no se atendió oportunamente la orden emitida en la sentencia de enero 24 de 2023 para reintegrar al señor Lara Sanmiguel al servicio de la Policía Nacional en el cargo que ejercía para su retiro u otro de igual categoría atendiendo sus condiciones personales, pues como se consignó en el sistema de gestión judicial SAMAI, la sentencia fue notificada a la entidad demandada desde el 14 de febrero de 2023 y solo 6 meses después y con ocasión de la tutela realizó la primera actuación administrativa tendiente a llevar a cabo dicho reintegro.

Cabe resaltar que desde el 29 de marzo de 2023 el actor aportó copia de la sentencia al director general de la Policía Nacional, por eso teniendo en cuenta su estructura y funciones descritas en el capítulo anterior, se tiene que el cumplimiento de dicho fallo

judicial corresponde a la Secretaría General de la Policía Nacional, a través del área de defensa judicial, cuya dependencia encargada de tramitar el reintegro de servidores públicos es el Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales.  
(...)

Para el Tribunal su papel es mucho más complejo pues es de su esencia hacer que al interior de la Policía Nacional las sentencias de condena no se constituyan en letra muerta sino en el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho y en tal virtud, garantizar el cabal cumplimiento de las sentencias, no sólo en lo relacionado con el pago, son también en lo atinente a las obligaciones de hacer, verbigracia, el reintegro del personal que ha dispuesto la decisión judicial de condena y así mismo hacer efectivo el principio de colaboración armónica mencionado.

En consecuencia, este Tribunal considera que si se acreditó la vulneración a los derechos fundamentales del demandante al trabajo, seguridad social y mínimo vital por parte de la demandada, pues pese a tener una sentencia desde el mes de enero de este año que ordenó su reintegro a la institución, la misma no se ha cumplido y su protección cobra especial importancia porque el demandante presenta una disminución de su capacidad psicofísica y su esposa y tres hijas menores de edad dependen económicamente de él para su sustento, frente a lo cual guardó silencio la demandada, operando la presunción de veracidad de que trata el artículo 20 del decreto 2591 de 1991 y ello se complementa con la presunción de buena fe del artículo 83 constitucional.

Así las cosas, le asistió razón al a quo para ordenar a la Dirección General de la Policía Nacional a través del Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales y el Grupo de Retiros y Reintegros, (perteneciente a la Dirección de Talento Humano<sup>7</sup>), realizar los trámites administrativos que permitan expedir el acto administrativo de reintegro del demandante, en cumplimiento de la sentencia de enero 23 de 2023 del Tribunal Administrativo del Huila, complementada el 27 de junio del mismo año en el proceso de radicado 41001333300620150006001, por eso habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia.”

[Sentencia del 5 de octubre de 2023, M.P: Jorge Alirio Cortés Soto, radicación: 41001333300820230025401](#)



<b>Magistrado Ponente:</b>	Ramiro Aponte Pino
<b>Instancia:</b>	Segunda
<b>Radicación:</b>	41 001 33 33 001 2023 00235 01
<b>Demandante:</b>	Crysthel Emanuella Gutiérrez Ramírez
<b>Demandado:</b>	DIAN, CNSC y Nación – Ministerio de Hacienda Y Crédito Público
<b>Fecha:</b>	26 de octubre de 2023

## NOMBRAMIENTO DE LISTA DE ELEGIBLES EN CONCURSO DE MÉRITOS DE LA DIAN

### Problema Jurídico

“El sub lite se contrae a establecer si se debe revocar el fallo impugnado y precisar si la ampliación de la planta de personal de la DIAN e integrar la lista de elegibles del proceso de selección de la DIAN 1461 de 2020 - cargo gestor III - código 303 - grado 03 (OPEC 126566), le otorga a la accionante el derecho a ser nombrada en periodo de prueba. En particular, si se vulneraron los derechos fundamentales invocados.”

### Extracto

“De acuerdo con el precedente constitucional, para consolidar el derecho a ser nombrado en un cargo de carrera se requiere i) que la persona haya participado en un concurso de méritos, ii) que su nombre esté incluido en la lista de elegibles y iii) que exista una vacante en el empleo para el cual concursó.

Descendiendo al caso concreto, está acreditado que la actora participó en el proceso de selección de la DIAN 1461 de 2020, y que después de superar las etapas del concurso, fue incluida en la lista de elegibles para proveer 15 vacantes definitivas del empleo gestor III, código 303, grado 3 (OPEC 126566); ocupando la posición 43.

Como ya se indicara, inicialmente se ofertaron 15 vacantes; las cuales, fueron provistas con los primeros posicionados; sin embargo, el Decreto 419 del 21 de marzo de 2023 amplió la planta de personal de la DIAN, creando, el siguiente número de empleos gestor III, código 303, grado 3: (...)

No obstante, que la DIAN posteriormente le solicitó a la CNSC la modificación de la autorización de la lista de elegibles y la reducción de los empleos (arguyendo razones técnicas y presupuestales), el 25 de septiembre de esta anualidad, dicha entidad le respondió que no encontró argumentos fácticos y jurídicos suficientes para dejar sin

efecto una decisión de autorización de uso de listas que impacta directamente el proceso de selección y las expectativas legítimas de quienes en el participaron.

Como también quedara expuesto, el Decreto 419 del 21 de marzo de 2023 (que amplió la planta de personal de la DIAN), se sustentó en un estudio técnico que evidenció la necesidad de crear nuevos cargos y en la viabilidad presupuestal emanada de la Dirección General del Presupuesto Público de Minhacienda; por tanto, las razones esbozadas para no utilizar la lista de elegibles y para solicitar la disminución de empleos carecen de fundamento.

Merced a lo anterior, se acredita el tercer presupuesto para la consolidación del derecho que tiene la accionante al nombramiento; porque al existir 78 vacantes y posicionarse en el puesto 43, se encuentra entre quienes deben ser designados; desde luego, en el correspondiente orden de mérito.

Merced a lo anterior, se revocará el fallo de primera instancia, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a cargos públicos, y se ordenará a la DIAN que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, inicie los trámites administrativos que se requieran para garantizar la provisión de los cargos gestor III, código 303, grado 3 (OPEC 126566); creados mediante Decreto 419 de 2023; en estricto orden de mérito, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Decreto 927 de 2023 y en la circular 1002020151-000005 del 31 de julio de 2023 de la DIAN.”

[Sentencia del 26 de octubre de 2023, M.P: Ramiro Aponte Pino, radicación: 41001333300120230023501](#)



Magistrada Ponente:	Nelcy Vargas Tovar
Instancia:	Segunda
Radicación:	41 001 23 33 003 2023 00276 01
Demandante:	Miguel Ángel Vanegas Méndez
Demandado:	Fiscalía Doce Seccional de Villavicencio y Otros
Fecha:	20 de octubre de 2023

## INTERNACIÓN DEL ACCIONANTE EN UNIDAD MENTAL NO DEVIENE EN PRIVACIÓN ILEGAL O INCONSTITUCIONAL DE SU LIBERTAD / PACIENTE REQUIERE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

### Problema Jurídico

“Corresponde a esta Sala Unitaria establecer si el señor MIGUEL ÁNGEL VANEGAS MÉNDEZ se encuentra injustificadamente privado de la libertad, y si por esa razón, corresponde revocar el fallo del a quo y acceder al amparo deprecado.”

### Extracto

“Huelga recordar que, el impugnante esgrime que no ostenta la “calidad de capturado”, pues la Fiscalía 19 Seccional de Villavicencio que conoce la investigación que se adelanta en su contra no ha emitido orden restrictiva de la libertad alguna, contrario a lo afirmado por su psiquiatra tratante, el cual negó su retiro voluntario del hospital tras considerar que se encontraba a órdenes de la mencionada investigación.

Para resolver los anteriores cuestionamientos, se tiene que la Fiscalía 19 Seccional de Villavicencio adelanta en contra del señor Miguel Ángel Vanegas Méndez la indagación No. 503506000561202300049, por la presunta comisión del delito de homicidio agravado de su menor hija, sin que dentro de dicha investigación se hubiera proferida medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en contra del accionante, tal y como en el acápite de lo probado se estableció.

Lo anterior (no existir orden judicial privativa de la libertad), por sí mismo, no tiene la virtud de tornar en ilegal o arbitraria la internación hospitalaria a la que viene siendo sometido el señor Miguel Ángel Vanegas Méndez, pues conforme al precedente inicialmente estudiado es posible que cualquier autoridad pública (no solo judicial) en ejercicio de sus funciones e incluso un particular, restrinja la libertad de cualquier persona, por lo que al encajar el hospital accionado en el concepto de autoridad pública, procede la Sala Unitaria a analizar las precisas circunstancias en que el señor

Vanegas se mantiene internado en dicho nosocomio y si de ello se deriva afectación de su derecho a la libertad.

(...)

Lo anterior pone en evidencia que, desde el ingreso del accionante al hospital accionado, ha recibido la atención necesaria que conllevó al diagnóstico de las patologías psiquiátricas que padece, sin que el tratamiento que requiere se hubiera finiquitado, al punto que es necesaria su internación en la institución de larga estancia, por lo que la permanencia del actor en la ESE accionada no obedece al capricho ni arbitrariedad de dicha entidad, sino al estado de salud del paciente que requiere atención especializada y por ello, no es posible predicar privación ilegal o inconstitucional de su la libertad, como bien concluyera el a quo.

Debe precisarse que, si bien al señor Miguel Ángel Vanegas Méndez en virtud de la autonomía que le asiste como paciente, tiene derecho a solicitar su retiro voluntario y a rehusar el tratamiento que le vienen suministrando, lo cierto es que a juicio del Tribunal, según la historia y evidencia clínica que obra en el plenario, el mismo padece enfermedades psiquiátricas que afectan su capacidad mental de discernimiento y lo llevaron incluso a autolesionarse, por lo que en las particulares circunstancias de salud en que se encuentra, no se requiere de su consentimiento para el suministro del tratamiento médico; así lo ha establecido el precedente:

*“Todo tratamiento, incluso el más ordinario, debe hacerse con el consentimiento del paciente. Existen por lo menos tres situaciones claras en las cuales no se cuenta con dicho consentimiento: 1) cuando el estado mental del paciente no es normal; 2) cuando el paciente se encuentra en estado de inconsciencia y 3) cuando el paciente es menor de edad. Con base en los hechos estudiados, el peticionario se encontraba en condiciones de manifestar su consentimiento en relación con el tratamiento.”*  
(Subrayado del Tribunal)

Ahora bien, puede que el hecho de permanecer el accionante hospitalizado genere una afectación legítima de su derecho a la libre locomoción, pues con ello, como en precedencia se estableciera, se busca tratar y alivianar sus patologías psiquiátricas lo cual conlleva a garantizar derechos de igual estirpe, tales como la vida, salud e integridad física del accionante, de su núcleo familiar y de la misma sociedad si se tiene en cuenta los antecedentes de agresividad del señor Vanegas, por manera que al no avizorarse afectación ilegal o inconstitucional del derecho a la libertad del mismo por parte de las accionadas, habrá de confirmarse la sentencia impugnada que denegó el amparo deprecado.”

[Sentencia del 20 de octubre de 2023, M.P: Nelcy Vargas Tovar, radicación: 41001233300320230027601](#)

# NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO



<b>Magistrada Ponente:</b>	Nelcy Vargas Tovar
<b>Instancia:</b>	Segunda
<b>Radicación:</b>	41 001 33 33 004 2016 00052 02
<b>Demandante:</b>	Nancy Ibarra Quintero
<b>Demandado:</b>	E.S.E. Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva y Otro
<b>Fecha:</b>	26 de septiembre de 2023

## CONTRATO REALIDAD / ELEMENTOS NO ACREDITADOS / AUXILIAR DE ENFERMERIA / SUBORDINACION NO DEMOSTRADA

### Problema Jurídico

“La Sala se contrae a establecer la legalidad del Oficio No. OTH-0253 del 5 de marzo de 2015. Para ello, deberá analizarse si entre NANCY IBARRA QUINTERO y la E.S.E. HOSPITAL HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA existió una relación de naturaleza laboral al margen de su vinculación a través de contratos sindicales, esto es, si se logró probar la subordinación: correspondencia de las labores con las funciones del personal de planta, cumplimiento de órdenes, prestación directa del servicio en forma continua e imposición de órdenes.”

### Extracto

“Para el Tribunal lo alegado por la apelante en cuanto al desarrollo de iguales funciones que el personal de planta no constituye un hecho notorio que se exima de prueba, pues no se evidencia que en nuestro medio tal suceso en particular hubiera sido suficientemente conocido y difundido por la comunidad, por lo que el primer argumento de la apelación incoada no está llamado a prosperar.

Ahora, no desconoce la Corporación que en virtud de los contratos sindicales se pueda ocultar una verdadera relación laboral en desmedro de los derechos de los trabajadores como lo ha establecido el precedente, no obstante, la declaratoria de la relación de trabajo dependerá de la probada existencia de la prestación personal del servicio, la remuneración y principalmente la subordinación; análisis al cual se procede.

ii) Frente a la subordinación, el Tribunal encuentra que si bien las actividades del auxiliar de enfermería tienen directa relación con las funciones misionales de la E.S.E.



afines con la prestación del servicio de salud, tal circunstancia, per se, no tiene la virtud de mutar la relación contractual en laboral, siendo necesario la debida acreditación de una actividad de control, vigilancia e imposición por parte de la entidad contratante.

(...)

Por lo expuesto, se omitió allegar prueba que conlleve al convencimiento de que la demandante acatara órdenes, le impusieran modo o cantidad de trabajo, cumpliera un horario ni que obedeciera protocolos de la organización, menos que hubiera sido sometido al poder disciplinario de la misma, pues no obra prueba documental tendiente a demostrar tales aspectos (verbigracia, directrices, llamados de atención y permisos) y la prueba testimonial resultó insuficiente, incumpliendo la demandante la carga probatoria que le asistía.

(...)

En suma, los elementos probatorios aportados no permiten tener por demostrada la subordinación como elemento propio de la relación laboral deprecada por la demandante, no obstante, enseñan que a la actora le fueron reconocidas las prestaciones antedichas sin desconocimiento de sus derechos, motivo por el cual, se confirmará la sentencia impugnada que denegó las pretensiones.”

[Sentencia del 26 de septiembre de 2023, M.P: Nelcy Vargas Tovar, radicación: 41001333300420160005202](#)

# NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO



<b>Magistrado Ponente:</b>	Gerardo Iván Muñoz Hermida
<b>Instancia:</b>	Segunda
<b>Radicación:</b>	41 001 33 33 007 2018 00326 01
<b>Demandante:</b>	Luis Alirio Correa Romero
<b>Demandado:</b>	Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensiona y Contribuciones Parafiscales de la Protección Especial Social – U.G.P.P.
<b>Fecha:</b>	26 de septiembre de 2023

## SUSTITUCIÓN PENSIÓN GRACIA A COMPAÑERO PERMANENTE / CONVIVENCIA EFECTIVA DURANTE LOS ULTIMOS 5 AÑOS ACREDITADA

### Problema Jurídico

“Consiste en determinar si debe revocarse la sentencia calendada 22 de julio de 2020 proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva que negó las súplicas de la demanda y como consecuencia de ello declarar que a la parte demandante – LUIS ALIRIO CORREA ROMERO - le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañero permanente de la causante Luz Marina Lugo de Gómez (q.e.p.d.).”

### Extracto

“Al respecto, en primer lugar, debe precisarse que en relación con el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor del cónyuge o compañero permanente supérstite de un pensionado(a) fallecido, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, no contempla como requisito la dependencia económica, sino que como requisitos para su reconocimiento y pago corresponden a la edad del cónyuge o compañero permanente para determinar si es vitalicia o temporal, y el requisito de la convivencia durante los cinco años anteriores a la muerte del pensionado(a). Dependencia económica que se exige acreditar cuando se trata de los hijos, padres y hermanos como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.  
(...)

Ahora, con relación a la convivencia debe señalarse que la misma no se refiere en forma exclusiva, a compartir el mismo techo y habitar junto al otro, sino que deben existir elementos como acompañamiento espiritual, moral y económico y el deber de apoyo y auxilio mutuo, debiendo así acreditarse la vocación de estabilidad y

permanencia, por lo tanto, no se tienen en cuenta aquellas relaciones casuales, circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida el fallecido pensionado.

Teniendo en cuenta lo anterior, contrario a lo manifestado por el A quo, para la Sala, con el material probatorio obrante en el proceso, se encuentra debidamente probada la convivencia por un espacio superior a los cinco (5) años, en una relación en donde existió la voluntad de conformar un hogar y mantener una comunidad de vida, caracterizada por el acompañamiento emocional, social, económico, espiritual y el propósito de constituir una familia entre la demandante LUIS ALIRIO CORREA ROMERO y la causante LUZ MARINA LUGO DE GÓMEZ (q.e.p.d.).

(...)

Evidenciándose que las manifestaciones del demandante en el interrogatorio de parte que le fuera practicado, así como los testimonios recepcionados, son claros y coincidentes entorno al vínculo afectivo y convivencia que de manera ininterrumpida se presentó entre la señora Luz Marina Lugo de Gómez (q.e.p.d.) y el señor Luis Alirio Correa Romero desde mediados del año 2011 y hasta el 8 de septiembre de 2017, fecha en que falleció la causante, del conocimiento que ellos vivían juntos y sus lugares de residencia.

Así mismo, la prueba testimonial recepcionada, y en especial lo manifestado por Andrea del Pilar Gómez Lugo, hija de la señora Luz Marina Lugo de Gómez (q.e.p.d.) se constata que el señor Luis Alirio Correa Romero estuvo en todo momento con la causante durante sus últimos años de vida, y brindándole en compañía de la hija de la causante, el cuidado que requirió durante la enfermedad que padecía y por la cual falleció.

(...)

En ese orden de ideas, para la Sala resulta procedente la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados – Resoluciones Nos. 12133 del 9 de abril de 2018, RDP 016988 del 15 de mayo de 2018 y RDP 021967 del 14 de junio de 2018 – al encontrarse acreditado que al señor LUIS ALIRIO CORREA ROMERO le asiste el derecho a que se le reconozca, liquide y pague la sustitución de la pensión gracia en calidad de compañero permanente supérstite de la causante Luz Marina Lugo de Gómez (q.e.p.d.), por estar demostrada la convivencia y el apoyo mutuo en todas las esferas (emocional, moral, económico, espiritual y social) durante los últimos cinco (5) años, anteriores a la muerte de la señora Luz Marina Lugo de Gómez (q.e.p.d.) y cumplir los requisitos previstos en los artículos 46 numeral 1 y 47 literal a) de la ley 100 de 1993, modificado por los artículos 12 y 13 literal b de la Ley 797 del 2003, para acceder al derecho en su condición de beneficiario de la sustitución pensional.”

[Sentencia del 26 de septiembre de 2023, M.P: Gerardo Iván Muñoz Hermida, radicación: 41001333300720180032601](#)

# NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO



<b>Magistrado Ponente:</b>	Jorge Alirio Cortés Soto
<b>Instancia:</b>	Primera
<b>Radicación:</b>	41 001 23 33 000 2016 00009 00
<b>Demandante:</b>	Servicios Asociados S.A.S.
<b>Demandado:</b>	DIAN
<b>Fecha:</b>	26 de septiembre de 2023

## IMPUESTO SOBRE LA RENTA / DERECHO A DEDUCCIÓN DE APORTES A FONDOS DE PENSIONES SIN SUJECCIÓN AL ARTÍCULO 107 E.T.

### Problema Jurídico

“i) ¿Deben anularse los actos administrativos contenidos en la liquidación oficial de revisión No 132412014000036 de agosto 19 de 2014 mediante la cual se modificó la liquidación privada de la declaración de corrección provocada del impuesto a la renta del año gravable 2012 y la resolución No 008683 de septiembre 9 de 2015 con la cual se decidió el recurso de reconsideración interpuesto contra la anterior decisión, por estar incursos en las causales de anulación de infracción de las normas superiores en que debieron fundarse y violación al debido proceso, para que se restablezca el derecho de la parte actora?

ii) ¿Resulta o no procedente la sanción tributaria que se impuso a la actora por inexactitud?

La tesis del Tribunal es que se deben acoger las pretensiones anulatorias por cuanto los aportes voluntarios a pensiones son deducciones especiales autorizadas por el legislador. Para sustentar la anterior tesis se analizará: a) lo probado y, b) los cargos invocados en la demanda.”

### Extracto

“Comoquiera que los dos cargos se relacionan con la vulneración del artículo 107 del E.T. en consonancia con el artículo 126 Id, por el desconocimiento que la DIAN hizo de las deducciones por \$750’000.000 declaradas por la actora como aportes a fondos de pensiones, se analizarán conjuntamente (...)

Acerca del alcance de estas deducciones y el cumplimiento de los requisitos que el artículo 107 del E.T. exige para acogerlas, el Consejo de Estado ha indicado:

“Asimismo, es importante advertir que en el presente caso la deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de cesantías no requiere el cumplimiento de los requisitos consagrados en el artículo 107 del Estatuto Tributario, pues corresponde a una deducción creada por el legislador, y, como tal, para que proceda su aplicación, deben cumplirse los requisitos específicos previstos en la norma legal que la consagra, es decir los señalados en el artículo 126-1 del Estatuto Tributario”. (Subrayas son del Tribunal).

En esa medida, atendiendo la directriz del órgano de cierre, no asiste razón al ente demandado al exigir el cumplimiento de los requisitos del artículo 107 del E.T. para acoger la deducción contenida en la declaración privada presentada por la actora y en ese sentido el cargo prospera.

Ahora, la otra parte del debate litigioso y que plantean los cargos en estudio, es establecer si los aportes voluntarios que hizo la actora a fondos de pensiones y cesantías son deducibles sin ninguna limitación conforme al inciso 1o del artículo 126 o tienen el límite previsto en el inciso 3o Id (no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del año), (...)

Como puede verse, la jurisprudencia del órgano de cierre ha venido sosteniendo que el contribuyente que se encuentre en la situación prevista en el inciso 1o del artículo 126 del E.T., tiene derecho a deducir sin sujeción al artículo 107 Id, los aportes a fondos de pensiones, sin la restricción que trae el inciso 3o que regula una situación diferente, por eso el cargo prospera y ello conduce a que se deje sin efecto el acto demandado sin que sea necesario entrar a auscultar los demás cargos.”

[Sentencia del 26 de septiembre de 2023, M.P: Jorge Alirio Cortés Soto, radicación: 41001233300020160000900](#)

# NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO



<b>Magistrado Ponente:</b>	Enrique Dussán Cabrera
<b>Instancia:</b>	Segunda
<b>Radicación:</b>	41 001 33 33 009 2018 00412 01
<b>Demandante:</b>	Claudia del Pilar Mosquera Vargas
<b>Demandado:</b>	Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
<b>Fecha:</b>	24 de octubre de 2023

## CONTRATO REALIDAD / ELEMENTOS ACREDITADOS / AUXILIAR DE ENFERMERIA

### Problema Jurídico

“Conforme la apelación de la parte demandada y acorde a lo establecido con el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, corresponde determinar si entre la señora Claudia del Pilar Mosquera Vargas y la Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional se configuró una relación de carácter laboral, en el periodo comprendido entre el 2 de abril de 2007 hasta el 30 de agosto de 2017, específicamente si se encuentra probado el elemento de la subordinación, y en consecuencia si debe restablecerse el derecho condenando a la entidad al pago de las prestaciones sociales y acreencias laborales a favor de la demandante durante dicho periodo, y en consecuencia si se debe declarar la nulidad del acto administrativo demandado y de contera restablecerle el derecho en la forma solicitada. (...)”

### Extracto

#### “Prestación personal del servicio.

En este punto no existe discusión que la señora Claudia del Pilar Mosquera Vargas prestó sus servicios directamente como contratista en la entidad demandada que actuó como contratante, mediante la suscripción de sendos contratos de prestación de servicios, que ella prestó sus servicios como auxiliar de enfermería en la Policía Nacional clínica La Inmaculada Dirección de Sanidad Seccional Huila, en el periodo comprendido entre el 2 de abril de 2008 al 30 de agosto de 2017, pues así fue pactado en los citados contratos de prestación de servicios.  
(...)

#### Remuneración.

Se encuentra probado en el proceso que la accionante Claudia del Pilar Mosquera Vargas recibió una remuneración por la prestación de sus servicios como auxiliar de enfermería de la clínica La Inmaculada de la Policía Nacional Sanidad Seccional Huila,

del 2 de abril de 2008 al 30 de agosto de 2017 según se advierte de los contratos de prestación de servicios.

Así, se encuentra acreditado este criterio de la relación laboral.

### **Subordinación continuada.**

Los elementos que integran este criterio, conforme la sentencia de unificación y las pruebas allegadas se establece:

En cuanto al lugar de trabajo y horario de labores se advierte que la demandante prestaba su servicio como auxiliar de enfermería en la clínica La Inmaculada de la Policía Nacional Seccional de Sanidad Huila, pues así quedó establecido en los contratos de prestación de servicios donde se pactó que su labor la desempeñaría en las instalaciones del contratante.

Respecto al horario de las labores, la jurisprudencia ha determinado que la imposición de una jornada de trabajo no implica necesariamente que exista subordinación laboral, pues ciertas actividades como las de profesionales de la salud, necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas, en este caso los contratos le imponían a la parte actora que debía prestar sus servicios de acuerdo con las normas propias de su profesión; además, como lo mencionaron los testigos Lucelly Loaiza Parra, Lina Katherine Pérez Gómez, Sandra Liliana Cabrera Claros la demandante debía cumplir un horario de trabajo, conforme al cuadro de turnos rotativos.

(...)

De esta manera, para la sala es claro que lejos de tratarse de un servicio transitorio, la vinculación de la demandante tenía vocación de permanencia ante la necesidad de la prestación de este servicio y la función misional de la clínica La Inmaculada de la Policía Nacional Seccional de Sanidad Huila.

(...)

De acuerdo con lo probado, se concluye que la señora Claudia del Pilar Mosquera Vargas demostró que en la ejecución de su labor como auxiliar de enfermería prestada en la Policía Nacional Clínica La Inmaculada Seccional Sanidad Huila del 2 de abril de 2008 al 30 de agosto de 2017, sin solución de continuidad, se configuraron los elementos propios de una relación laboral, como son la prestación personal del servicio, subordinación y remuneración.”

[Sentencia del 24 de octubre de 2023, M.P: Enrique Dussán Cabrera, radicación: 41001333300920180041201](#)





<b>Magistrado Ponente:</b>	Gerardo Iván Muñoz Hermida
<b>Instancia:</b>	Segunda
<b>Radicación:</b>	41 001 33 31 001 2012 00072 01
<b>Demandante:</b>	Aurora Ramírez Cumbe y Otros
<b>Demandado:</b>	Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
<b>Fecha:</b>	08 de septiembre de 2023

## FALLA DEL SERVICIO POR VIOLACIONES A DEBERES FUNCIONALES DE ORIGEN CONVENCIONAL / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / INEXISTENCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA

### Problema Jurídico

“Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación incoado por la parte demandante contra la decisión que en primera instancia profirió el Juzgado Primero Administrativo de Neiva que acogió las pretensiones de la demanda, para lo cual deberá determinar si las pruebas allegadas y controvertidas dentro del presente proceso permiten atribuir a la entidad demandada la responsabilidad de reparar los daños causados a los demandantes, como consecuencia de la muerte del señor OSCAR JAVIER CABRERA SERRANO en hechos ocurridos el día 1 de enero de 2010, en la vereda Bajo Piravante del municipio de Campoalegre, o si por el contrario, se configuró la culpa exclusiva de la víctima, como lo expone la entidad demandada.”

### Extracto

“[N]o cabe duda que el hecho que generó la muerte de CABRERA SERRATO constituye un verdadero atentado contra su derecho a la vida e integridad física, además de una infracción a las normas del derecho internacional humanitario, pues no debe mirarse el hecho aislado de su muerte, sino el contexto en que se realizó, ya que converge en circunstancias por entero reprochables a la luz de la función que legal y constitucionalmente compete a la fuerza pública.

Se debe concluir entonces que en efecto lo que se impone en esta sentencia es la REVOCATORIA de la de primer grado, ya que no triunfó la tesis de la “CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA” construida a partir de un combate que quedó plenamente descartado y por el contrario hallarse probada a partir de prueba indiciaria la falla del servicio en la que incurrió el Ejército Nacional, ya que, a través de sus agentes decidió atentar contra la vida de una persona, respecto de quien, si es que existía alguna tacha, debió capturar o someter, ya que era perfectamente posible hacerlo, al margen de que se encontrara en flagrante conducta punible o fuera o no miembro de la ilegalidad, contrariando por contera su función Constitucional la cual le obliga, a la luz del artículo 217 constitucional a defender la soberanía y el orden constitucional, así

como la integridad del territorio nacional y ello comprende desde luego la defensa del derecho a la vida de los ciudadanos colombianos.

Está acreditado que el señor CABRERA SERRATO recibió DOS impactos de fusil, uno en su brazo y el otro en la zona escapular, es decir, en posición de fuera de combate.

Sumado a lo anterior, se destaca que el grupo militar, estaba integrado por tres soldados, dotados con armas largas, contra una sola persona que supuestamente los atacaba, lo que equivaldría a una proporción superior al doble frente al civil.

Encuentra la Sala entonces, que si la intención del Ejército Nacional con la Misión táctica Damasco, era realizar labores de inteligencia, registro y control de área militar en aras de ubicar un grupo de narcoterroristas pertenecientes a la segunda compañía de la Teófilo Forero que venían extorsionando y cobrando vacunas a comerciantes del municipio de Campoalegre, ha debido implementar el uso de la fuerza con medidas y actos menos radicales que la realización de disparos de manera indiscriminada y desproporcionada, siendo lo viable el uso de otros medios – persecución, inmovilización, disparos al aire, etc.- a través de los cuales se ejecutara en debida forma la labor de la entidad demandada; contrario sensu, lo que se observa es que se actuó de manera imprudente y por esa vía, se produjo un daño que los demandantes no están en la obligación de soportar.

(...)

En el caso concreto, se insiste, no es posible desligar la actuación del Ejército Nacional de la producción del daño, pues quedó establecido que los miembros activos de la institución, específicamente los pertenecientes al Grupo Rural Gaula participaron en calidad de actores principales y prevalidos de su investidura, en el accionar que desencadenó en la muerte de una persona inocente (recuérdese que la presunción de inocencia se mantiene incólume hasta que se desvirtúe por sentencia judicial en firme) que se encontraba en estado de desventaja manifiesta, y que sometieron sin mayor resistencia a las balas y fusiles del Estado.

Como corolario de todo lo dicho queda solo manifestar, para dar respuesta al problema jurídico planteado, que en el asunto sub examine no opera ningún fenómeno liberador de responsabilidad y por el contrario lo que se impone es admitir la falla en la que incurrió la parte demandada, razón por la cual la sentencia se revocará y se declarará la responsabilidad, advirtiéndose, que en cumplimiento de las tesis desarrolladas por la jurisprudencia del Consejo de Estado, se impondrán medidas de satisfacción en aras de la observancia íntegra del principio de reparación integral, tal y como pasara a explicarse.”

[Sentencia del 08 de septiembre de 2023, M.P: Gerardo Iván Muñoz Hermida, radicación: 41001333100120120007201](#)



<b>Magistrado Ponente:</b>	Enrique Dussán Cabrera
<b>Instancia:</b>	Segunda
<b>Radicación:</b>	41 001 33 33 002 2018 00014 01
<b>Demandante:</b>	Jazmín Pastrana Aldana y Otros
<b>Demandado:</b>	Municipio de Neiva - Huila
<b>Fecha:</b>	12 de septiembre de 2023

## ACCIDENTE DE TRÁNSITO / HUECO EN LA VÍA / CONCURRENCIA DE CULPAS 50%

### Problema Jurídico

“Conforme la apelación de las partes actora y demandada y acorde a lo establecido en el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, debe determinarse si el daño antijurídico padecido por los demandantes le es imputable al municipio de Neiva, específicamente si se encuentra probado que la causa eficiente del accidente de tránsito fue un hueco en la vía pública por la que transitaba la señora Jazmín Pastrana, y en consecuencia si la entidad demandada es responsable de los perjuicios ocasionados a los demandantes como consecuencia de las lesiones padecidas por ella en el accidente de tránsito ocurrido el 8 de enero de 2013.

De encontrarse probado lo anterior, corresponde analizar si debe reconocerse el pago de perjuicios morales al demandante Justo Elías Quiroga González en calidad de compañero permanente de la víctima directa, si debe reconocerse perjuicios a título de daño a la vida y relación y daño a la salud de forma independiente, y si se debe incrementar el monto de los perjuicios reconocidos.”

### Extracto

“[E]l municipio de Neiva en el recurso de apelación atribuye la causa del accidente a la imprudencia e impericia de la accionante al conducir el vehículo y el incumplimiento de las normas mínimas de tránsito, afirmando que ella se desplazaba por fuera de la velocidad reglamentaria, pues de haber sido así hubiera podido divisar las condiciones de la vía, y con ello evitar el accidente.

Sin embargo tal afirmación carece de soporte probatorio, pues no existe en el proceso prueba alguna que permita determinar la velocidad a la que se desplazaba la víctima, y al no existir el informe de policía sobre el accidente, mal puede establecerse como hipótesis del mismo “alta velocidad”, sin que exista prueba alguna que respalde esta afirmación, correspondiendo esta exclusivamente a una suposición de lo que pudo haber pasado, no así con la hipótesis del “hueco” como causa del accidente, pues aun

cuando no se puede soportar en informe oficial alguno, si existen otros medios de prueba que permiten corroborar dicha hipótesis, como ya se expuso.

Ahora, el hecho que la víctima transitara regularmente esta vía y conociera su mal estado, no invierte totalmente la imputación por el daño que padeció y no estaba en la obligación de soportar, y mucho menos puede predicarse el eximente de culpa exclusiva de la víctima, porque lo cierto es que la vía estaba deteriorada en razón a la omisión del municipio de realizarle el mantenimiento respectivo a la vía, y fue ese deterioro el que originó el accidente.

Si bien, la actividad de la conducción, como actividad peligrosa, exige el cumplimiento del deber objetivo de cuidado del conductor, es decir, acatar las normas de tránsito y conducir con prudencia y diligencia, no puede utilizarse este argumento para atribuir exclusivamente la responsabilidad del accidente a la demandante como lo pretende hacer la entidad en el recurso, pues ello sería tanto como justificar la omisión del ente territorial y admitir que este continúe incumpliendo su obligación legal, como quiera que aun cuando en virtud de ello se causen lesiones a los administrados, la responsabilidad sería únicamente de estos últimos por no conducir con la prudencia para esquivar el mal estado de la vía y evitar caer en un hueco o defecto de la vía que lo lesione.

(...)

Sin embargo, la Sala comparte la atribución de la responsabilidad compartida con la demandante, como quiera que existen circunstancias que atenúan la responsabilidad de la demandada, como el mismo hecho de conocer la vía por ser la que utilizaba regularmente para acudir a su trabajo y que llevaba realizando por periodo prolongado, que si bien no supone una atribución exclusiva de la responsabilidad a la demandante, si aminora la responsabilidad del Estado porque al conocer la vía también conocía el riesgo que representaba transitar por la misma y en consecuencia debía tomar mayores medidas de precaución y prudencia a la hora de conducir, y en el recurso de apelación la parte actora no realizó mayor argumentación al respecto que pudiera ser analizado en esta instancia, limitándose a manifestar que no compartía la concurrencia de culpas establecida por el a-quo.

Bajo esta línea de razonamiento, la Sala encuentra acreditada la imputación material y jurídica del daño padecido por la señora Jazmín Pastrana Aldana al municipio de Neiva, disminuido en un 50% en razón a la concurrencia de culpas entre este y la demandante, decretada por el a-quo, por lo que no se acogen los argumentos expuestos por las partes sobre este elemento de la responsabilidad.”

[Sentencia del 12 de septiembre de 2023, M.P: Enrique Dussán Cabrera, radicación: 41001333300220180001401](#)



<b>Magistrado Ponente:</b>	Ramiro Aponte Pino
<b>Instancia:</b>	Segunda
<b>Radicación:</b>	41 001 33 33 004 2015 00291 02
<b>Demandante:</b>	Luis Ignacio Castro Rojas
<b>Demandado:</b>	Municipio de Neiva - Huila
<b>Fecha:</b>	19 de septiembre de 2023

## ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EN LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / NO ACREDITACIÓN DE REQUISITOS / GESTIÓN DE CONSERVACION DE ARCHIVO A MOTU PROPIO Y POR OBLIGACION LEGAL

### Problema Jurídico

“El sub lite se contrae a establecer inicialmente si el medio de control de reparación directa se promovió dentro de la oportunidad legal. En caso afirmativo, establecer si debe revocarse la decisión de primera instancia, porque el municipio de Neiva es administrativamente responsable de los perjuicios materiales e inmateriales que el actor estima le irrogaron al no cancelarle el servicio de guarda y custodia de los documentos y archivos generales de la extinta sociedad Autopista Surabastos Ltda (desde el mes de febrero de 2002 al 15 de abril de 2013).”

### Extracto

“Como ya se indicara, la parte actora solicita revocar la sentencia de primera instancia, considerando que: i) era una función legal del municipio de Neiva la custodia del archivo durante 5 años; ii) en su momento la junta de socios no aceptó el valor del servicio de custodia del archivo (\$18.000.000); iii) el ente territorial no asumió la custodia, argumentando no contar con un lugar adecuado, y solo lo hizo en el año 2013; iv) aunque se acepte -en gracia de discusión- que el municipio estaba dispuesto y en condiciones de recibir la documentación desde el 2005, la custodia ejercida con anterioridad (desde el año 2001) debe ser remunerada (“todo trabajo se remunera”); v) el demandante no podía definir la custodia del archivo y disponer los recursos para tal efecto (funciones a cargo de la junta de socios), ni entregar los documentos al municipio de Neiva, porque éste le advirtió no contar con un lugar adecuado; vi) la partida asignada (\$4.660.203), es prueba de que se debe remunerar la “delicada” labor desarrollada y, vii) el principio de que nadie puede alegar en su beneficio su propia torpeza no resulta aplicable.

Al respecto, es pertinente puntualizar lo siguiente:

a.- La Sala considera que la presente controversia debe analizarse a la luz de la teoría del enriquecimiento sin justa causa, puesto que el demandante afirma que asumió la custodia del archivo de la liquidada Autopista Surabastos limitada sin recibir la correspondiente retribución; labor, que en su sentir, debe ser sufragada por el municipio de Neiva, en su condición de exsocio.

(...)

e.- Tomando como marco de reflexión la anterior normatividad y la opinión de la autoridad de vigilancia y control; es menester colegir que, en su condición de liquidador, el demandante tenía la obligación de conservar el archivo de la sociedad cinco años después de la aprobación de la cuenta final, y en la medida en que esta fue registrada en la Cámara de Comercio de Neiva el 18 de febrero de 2002; dicho compromiso legal expiró el 18 de febrero de 2007.

f.- En tal virtud, la gestión que desplegó a partir de esa calenda lo hizo a motu proprio y constituye un acto de mera liberalidad que en los términos del precedente anteriormente mencionado no se puede considerar como un enriquecimiento sin causa y no se circunscribe dentro de las excepciones que justifican su reconocimiento.

Teniendo en cuenta que por su gestión en el proceso de liquidación recibió la correspondiente remuneración; no es de recibo aceptar que pretenda ser compensado por una obligación que dimana de la propia ley. Máxime, si se apropiaron gastos para atender el proceso de liquidación.

Incluso, desde el 25 de febrero de 2005 el ente territorial accionado puso a su disposición un inmueble, y aunque este no satisfacía los requerimientos del Archivo General de la Nación, no acreditó que en el lugar donde el actor ubicó el archivo (su residencia<sup>6</sup>) sí reunía los requisitos echados de menos. Tampoco probó que tuviera que asumir gastos de bodegaje.

g.- Ahora bien, si el demandante no estaba de acuerdo con las decisiones que en su momento adoptó junta de socios (en cuanto a su remuneración y demás gastos de la liquidación); debió manifestarlo en su momento, y dentro de la oportunidad legal, pudo iniciar las correspondientes acciones judiciales. h.- Merced a lo anterior, es menester confirmar la sentencia impugnada.”

[Sentencia del 19 de septiembre de 2023, M.P: Ramiro Aponte Pino, radicación: 41001333300420150029102](#)



Magistrado Ponente:	José Miller Lugo Barrero
Instancia:	Primera
Radicación:	41 001 23 33 000 2019 00339 00
Demandante:	Gentil Rojas Ramírez y otro
Demandado:	EMGESA S.A. E.S.P. hoy ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
Fecha:	19 de septiembre de 2023

## CONSTRUCCIÓN HIDROELÉCTRICA EL QUIMBO / ADQUISICIÓN DE PREDIOS / ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA / LESIÓN ENORME / CADUCIDAD PROBADA

### Problema Jurídico

“Teniendo en cuenta que, mediante providencia del 17 de febrero de 2023, se advirtió a las partes que se dictaría sentencia anticipada, pues se daban las condiciones fácticas para ello, siguiendo lo previsto en el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, que fuera adicionado por la Ley 2080 de 2021, le corresponde a la Sala determinar ¿si el medio de control de reparación directa instaurado por Gentil Rojas Ramírez y Beatriz Moreno Cabrera en contra de la sociedad EMGESA S.A. hoy ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., se presentó dentro de la oportunidad legal que correspondía y de no ser así, si procede declarar probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada y como consecuencia de ello, la terminación del proceso?(...)”

### Extracto

“En ese orden, es claro que para adelantar el proceso en el que se pretenda o se tenga como somo supuesto para demandar el enriquecimiento sin causa y la lesión enorme, tal como lo indica el Consejo de Estado, debe ser a través del medio de control de reparación directa y que por ende, estará sujeto al término de caducidad definidos por la ley para dicho medio de control, que por regla general, se contabiliza a partir del momento siguiente de la ocurrencia del daño, cuando este es evidente y no existe duda alguna, o a partir del momento en que el actor tenga conocimiento del daño, si tal momento depende de otras circunstancias o factores concretos.

Por lo anterior, para efectos del cómputo del término de caducidad en este caso, es necesario ubicar la fecha, en la que, según los demandantes, ocurrió la lesión de su derecho patrimonial y cuándo se presentó el empobrecimiento de los demandantes y el enriquecimiento sin causa por parte de EMGESA S.A. E.S.P. hoy ENEL COLOMBIA S.A. E.SP. y que dieron lugar a reclamar la indemnización de los perjuicios ocasionados y cuantificados en la demanda.



En tales circunstancias, el término de caducidad del medio de control de reparación directa ejercido en este caso, es el señalado literal i) del numeral 2 del artículo 164 del C.P.A.C.A., esto es, dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia y según los hechos que constituyen la causa petendi que ahora se estudia, es claro que el daño se causó y tuvo génesis en el contrato de compraventa celebrado por los demandantes, en el que los actores son los vendedores de los predios de su propiedad denominados “Lote NÚMERO 44”, “Lote NÚMERO 57”, Lote Número Cuatro Alemania”, “Lote NÚMERO 14 Bélgica”, y “Lote de Terreno NÚMERO 15 La Holanda”, ubicados en la vereda Matambo, jurisdicción del municipio de Gigante – Huila, y la compradora la empresa EMGESA S.A. E.S.P. hoy ENEL COLOMBIA S.A. E.SP., el cual fue debidamente perfeccionado mediante escritura pública No. 2.127 del **23 de diciembre de 2013** en la Notaría Primera del municipio de Garzón – Huila.

Se destaca que los demandantes, según los hechos de la demanda, eran conocedores que para ese momento existía un Manual de Precios Unitarios para liquidar los inventarios y bienes objeto de negociación y que el mismo había sido aprobado mediante Resolución No. 180480 de 2010, y que, por ende, al no tenerse en cuenta tuvo incidencia en el daño que se les causó, el cual se materializó al momento en que transfirieron su derecho de dominio y posesión de los referidos inmuebles, mediante la escritura de compraventa No. 2.127 del 23 de diciembre del 2013, sin que exista razón, hecho o prueba que permita afirmar que los actores tuvieron conocimiento del daño en otro momento o que les imposibilitó conocerlo en tal época.

Para la Sala es evidente, entonces, que al perfeccionarse el negocio jurídico de venta se causó el daño y siendo que este se suscribió y se solemnizó mediante la escritura pública número 2.127 del 23 de diciembre del 2013 en la Notaría Primera del Círculo de Garzón – Huila, la cual fue registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Garzón el día 27 de febrero de 2014 -según se observa en el índice 46 Samai/prueba aportada por la demandada - es claro que la caducidad debe contarse a partir del día siguiente de esta última fecha, y como la demanda se presentó el 14 de febrero de 2018, ante los jueces civiles del circuito de Garzón, se impone concluir que efectivamente se configuró la excepción de caducidad propuesta por la demandada y que por ende, debe rechazarse la demanda por esta causa.”

[Sentencia del 19 de septiembre de 2023, M.P: José Miller Lugo Barrero, radicación: 41001233300020190033900](#)



Magistrado Ponente:	José Miller Lugo Barrero
Instancia:	Segunda
Radicación:	41 001 33 33 002 2016 00480 01
Demandante:	Gustavo Artunduaga Flores y Otros
Demandado:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y OTRO
Fecha:	03 de octubre de 2023

## RESPONSABILIDAD POR DAÑOS SUFRIDOS POR MENOR EN ACCIDENTE EN CENTRO A CARGO DEL ICBF / DAÑO A LA SALUD NO PROCEDE A FAVOR DE PADRES, SOLO VICTIMA DIRECTA / INEXISTENCIA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA

### Problema Jurídico

“Como el a quo accedió a las pretensiones y la entidad demandada y las llamadas en garantía recurren tal decisión, corresponderá a la Sala determinar si procede revocar tal decisión y definir si ¿concurren los presupuestos necesarios para atribuir responsabilidad administrativa por falla en la prestación del servicio de protección y cuidado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y de manera solidaria a la Fundación Familia Mujer Infancia –FUNAMI- y a la Aseguradora Solidaria de Colombia, por el fallecimiento del menor Pablo Andrés Artunduaga Vargas, ocurrido en el centro de desarrollo infantil “Dejando Huellas”, ubicado en el Municipio de Saladoblanco, Huila?”

### Extracto

“[A]l momento de ocurrencia de los hechos, el menor Pablo Andrés Artunduaga Vargas se encontraba en una situación de incapacidad, teniendo en cuenta que contaba con tan solo cuatro años de edad, por lo que no estaba en la condición de auto protegerse; de igual manera, se deduce que, al momento de ingresar al CDI Dejando Huellas, se encontraba en perfectas condiciones, pues no existe prueba que demuestre lo contrario.

Si bien el ICBF considera que no debe responder por los daños irrogados al menor, porque la lesión fue causada por el mismo menor y por la intervención de otro menor que golpeó la puerta con la que el niño Pablo Andrés resultó lesionado, cuando se hallaban bajo el cuidado de la Fundación Familia Mujer Infancia –FUNAMI-, también lo es que el Sistema de Bienestar Familiar es un servicio público a cargo del Estado dirigido a promover la integración y realización armónica de la familia, la protección de los niños y niñas del país, entre otras; y por lo tanto, la existencia del vínculo,

mediante la suscripción de un contrato especial de aportes, no transforma la naturaleza del servicio público esencial de bienestar familiar encaminado a la protección específica de la niñez colombiana y a la protección y efectividad de los derechos de los niños contenidos en el artículo 44 de la Constitución Política, sobre todo si se tiene en cuenta que los hogares comunitarios se constituyen con el aval, intervención y supervisión del ICBF, tal como lo dispone el artículo 2 del Decreto 1340 de 1995, según el cual el ICBF establecerá los lineamientos para el funcionamiento del programa, “dando cumplimiento a la obligación del Estado, en concurrencia con la familia y la sociedad de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”.

(...)

De esta manera, sin lugar a dubitación alguna, el daño reclamado en la demanda es imputable al ICBF, porque dicha entidad se ubica en la posición de garante cuando, a través de un operador, asume el cuidado y la atención del menor, y por tanto, como en desarrollo del mismo se causó el hecho dañoso, tiene la obligación de repararlo. En estas condiciones, su responsabilidad es objetiva y se estructura a partir de la simple demostración de que el daño se produjo en la ejecución de una labor propia del servicio prestado, como sucede en este caso.

(...)

Respecto a la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima que se alega, se precisa que en términos generales, el Código Civil colombiano prevé que los daños causados a otra persona, por fuera de un vínculo contractual, se define así: “El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido” (Art. 2341 Código Civil).

Sumado a lo anterior, el Art. 2348 Código Civil prevé que: “Los padres serán siempre responsables del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de mala educación o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir”, lo cual impone concluir que, de ninguna manera, puede ser eximente de responsabilidad la culpa misma del menor, dado que no tienen la capacidad legal para adquirir ninguna clase de obligaciones, excepto las contempladas en la ley para los menores adultos.”

[Sentencia del 03 de octubre de 2023, M.P: José Miller Lugo Barrero, radicación: 41001333300220160048001](#)



<b>Magistrada Ponente:</b>	Nelcy Vargas Tovar
<b>Instancia:</b>	Segunda
<b>Radicación:</b>	41 001 33 33 005 2017 00108 01
<b>Demandante:</b>	NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL
<b>Demandado:</b>	Luis Iván Chara Vergara
<b>Fecha:</b>	31 de octubre de 2023

## ELEMENTOS ACREDITADOS / CULPA GRAVE DEL AGENTE / LESIONES CON ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / DISPAROS CON FUSIL EN FORMA IMPRUDENTE

### Problema Jurídico

“Corresponde a la Sala establecer, si hay lugar a revocar la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, que accedió a las pretensiones de la demanda, pues a juicio del demandado, no se encuentra configurado el presupuesto de procedencia del medio de control de repetición relacionado con la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa por parte del agente. Superado lo anterior, corresponde establecer si el recobro de la condena impuesta debe realizarse exclusivamente al demandado o si debe distribuirse por partes iguales entre este y la entidad demandante.”

### Extracto

“Así las cosas, al pretender la demandante la declaratoria de responsabilidad patrimonial del demandado, por haber ocasionado lesiones a los señores José Luis Cardozo y Hugo Fernando Espinoza Cano con una arma de dotación oficial cuando patrullaba en la represa de Betania el 24 de octubre de 1999, le corresponde demostrar la ocurrencia de tal supuesto, sin que la sentencia de condena impuesta a la entidad sea suficiente para tener por acreditada la conducta y la responsabilidad del exfuncionario (...)

El a quo concluyó que la conducta del demandado se enmarca dentro de la culpa grave; comoquiera que de las declaraciones vertidas dentro del proceso penal militar adelantado en su contra, se desprende que para la época de los hechos el militar realizaba un registro en la represa de Betania y al percatarse de los señores José Luis Losada Cardozo y Hugo Hernando Espinosa Cano disparó en su contra imprudentemente y sin justificación alguna, al punto que resultó condenado por la justicia penal militar por tales acontecimientos.

Huelga recordar, que el demandado considera que no actuó con culpa grave, pues fue condenado penalmente a título de mera culpa y no se acreditó “la intención” de causar daño, advirtiendo que las declaraciones del proceso penal militar enseñan que no tuvo el propósito de lesionar a nadie y que realizó unos disparos para “disuadir” las personas que pescaban en la represa de Betania, actividad que además se encontraba prohibida, añadiendo que el daño ocasionado fue mínimo, como se desprende de las incapacidades médicas legales y dictámenes realizados.

(...)

Adicionalmente, no queda duda que atendiendo al grado de cabo segundo que ostentaba el demandado para la época de los hechos, el mismo contaba con los conocimientos necesarios en manejo de armas y el uso excepcional de las mismas, por lo que al haber disparado imprudentemente contra dos (2) civiles, atentó en contra de la vida e integridad de los mismos, pues no se encontraba en medio de un combate ni en situación alguna que lo hubiera obligado a usar el armamento, confiando en que su actuar no ocasionaría ningún daño dado que lo hacía para “asustarlos”, pero realmente ocasionó lesiones a los señores José Luis Losada Cardozo y Hugo Fernando Espinosa Cano que generaron ocho (8) días de incapacidad a cada uno, por lo que el argumento de la apelación referente a la inexistencia de un actuar gravemente culposo está llamado al fracaso.

Frente al reproche de la alzada consistente en que las víctimas se expusieron imprudentemente a su propio daño, al pescar en un sitio prohibido para tal actividad, el Tribunal advierte que ello no se logró demostrar en el plenario, pues mientras las víctimas refieren en las declaraciones vertidas en el proceso penal militar que no existían letreros en la zona que les impidiera realizar su actividad, el cabo segundo Luis Iván Chara Vergara refiere que sí existían tales advertencias, sin obrar en el plenario medio de convicción alguno que dilucidara la existencia de la prohibición en comento y de todas maneras, ello no tiene la virtud de justificar el actuar desproporcionado e imprudente en que incurrió el aquí demandado.”

[Sentencia del 31 de octubre de 2023, M.P: Nelcy Vargas Tovar, radicación: 41001333300520170010801](#)



Magistrado Ponente:	Ramiro Aponte
Instancia:	Primera
Radicación:	41 001 23 33 000 2014 00542 00
Demandante:	CONSORCIO BC 300 (integrado por JHON ALEXANDER ARTUNDUAGA CLEVES y LUIS FERNANDO BOTERO LONDOÑO)
Demandado:	DEPARTAMENTO DEL HUILA y Otro
Fecha:	31 de octubre de 2023

## RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO NO ACREDITADA / SOBRECOSTOS POR MAYOR PERMANENCIA DE OBRA NO ACREDITADOS / AMPLIACIÓN DEL PLAZO NO AFECTÓ LA ECUACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO

### Problema Jurídico

“En la audiencia inicial se precisó que el litigio “Se contrae a establecer sí en la ejecución del Contrato 0348 del 2011 se presentó la ruptura del equilibrio económico en perjuicio del consorcio contratista, y sí por efectos del alegado incumplimiento en suministrar oportunamente la base granular, éste no pudo culminar la misma dentro del plazo contractual y se vio forzado a disponer de una mayor permanencia de la maquinaria pesada. En tal virtud, determinar si el alegado incumplimiento es imputable al Departamento del Huila y/o al Municipio de Neiva, y precisar si el demandante está asistido (sic) a percibir la indemnización por el deprecada”.

### Extracto

“La parte actora aduce que al no suministrarle oportunamente la sub base granular le impidió culminar la obra dentro del plazo contractual, forzando una mayor permanencia de la maquinaria en los frentes de trabajo; lo cual, alteró el equilibrio económico.

(...)

c.- Al abordar el análisis de las adiciones, otrosíes o contratos modificatorios, el H. Consejo de Estado considera que al juez le corresponde examinar la voluntad de las partes; con el fin de establecer si los acuerdos regularon aspectos que se pretenden dirimir por vía judicial, y al desatar la controversia, debe ahondar el alcance de lo acordado en las modificaciones: (...)

d.- Descendiendo al sub lite, considera la Sala que en ejercicio de su libertad contractual y autonomía negocial, en la segunda y en la tercera adición las partes

acordaron y plasmaron expresamente que la ampliación del plazo "... no genera aumento de costos, ni afecta la ecuación económica por mayor permanencia en el frente de la obra ...". En tal virtud, no existe duda que la demandante renunció voluntariamente a reclamar el sobrecosto que ahora deprecia judicialmente.

Por lo tanto, esta pretensión no tiene vocación de prosperidad.

(...)

f.- Con el fin de cuantificar el valor de la mayor permanencia en obra, el consorcio actor aportó una experticia rendida por el ingeniero civil Luis Esteban Baracaldo Rubiano<sup>24</sup>, quien en la audiencia de sustentación concluyó que "De acuerdo al equipo mínimo requerido por el pliego de condiciones eran 3 motoniveladoras a \$120.000 pesos hora; 3 vibro compactadores a \$60.000 pesos hora; 3 retroexcavadoras a \$70.000 pesos hora y 12 volquetas a \$50.000 hora, eso da un valor de 6.750.000 y se tomó el stand by los 375 días que aparecen dentro de todo el tema del contrato que duró la maquinaria parada en disponibilidad, como disponibilidad en el equipo para ejecutar la obra, eso da un valor de \$2.231.250.000 a eso el perito le resta el valor pagado por el contrato que fue \$ 476.970.933, lo cual queda un valor \$1.754.279.067".

(...)

Huelga recordar, que en el pliego de condiciones solo se exigía que el oferente contara con un equipo mínimo de maquinaria; consistente en 3 motoniveladoras, 3 vibro compactadores y 12 volquetas (y ese fue el equipo que se relacionó en la oferta) <sup>25</sup>. Sin embargo, el perito también relacionó y cuantificó el stand by de 3 retroexcavadoras; es decir, un equipo que no hizo parte del pliego y que no fue ofertado por el consorcio. Tampoco explicó o justificó el motivo por el cual este se encontraba en la obra (si en realidad estuvo). Mucho menos, si la entidad accionada o la interventoría autorizaron utilizarla.

(...)

j.- En ese orden de ideas, considera la Sala que la parte actora no demostró los aspectos concretos que en su opinión generaron los sobrecostos por mayor permanencia en obra. De contera, no se acreditó el alegado desequilibrio económico."

[Sentencia del 31 de octubre de 2023, M.P: Ramiro Aponte Pino, radicación: 41001233300020140054200](#)





<b>Magistrado Ponente:</b>	Jorge Alirio Cortés Soto
<b>Instancia:</b>	Primera
<b>Radicación:</b>	41 001 23 33 000 2013 00240 00
<b>Demandante:</b>	GERMÁN TORRES NAÑEZ y Otros
<b>Demandado:</b>	NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA y Otros
<b>Fecha:</b>	03 de octubre de 2023

## FALLA DEL SERVICIO POR INCAUTACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE ARROZ NO PROBADA / PROPIEDAD DEL ARROZ Y DAÑO ANTIJURIDICO NO DEMOSTRADOS / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

### Problema Jurídico

“i) ¿Configuran los demandantes un grupo que reúne las condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales? ii) ¿Debe declararse la responsabilidad administrativa y patrimonial de las demandadas por el daño antijurídico causado a los integrantes del grupo con ocasión de la incautación y destrucción de 1592 bultos de arroz Paddy y condenarlas a la reparación de los perjuicios ocasionados? La tesis del Tribunal es que los demandantes NO probaron el daño antijurídico que se alega, por lo que no hay lugar a declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial de las demandadas. (...)”

### Extracto

“El daño es antijurídico no por su causa sino en sí mismo, esto es, cuando afecta en forma individual un bien patrimonial jurídicamente protegido, en forma injusta y cuyo titular no tenga la obligación legal o jurídica de soportarlo por mandato legal o en virtud de un vínculo jurídico pues su causa desencadenante es el funcionamiento del Estado a través de sus servidores<sup>3</sup> y se caracteriza por ser efectivo, económicamente evaluable y susceptible de individualización personal o grupal, sin que sea necesario determinar si en el actuar dañino hubo comportamiento voluntario, doloso o culposo de los agentes que representan el órgano estatal que lo produjo.

En el presente caso el daño antijurídico se hace consistir en la afectación del derecho de dominio que los demandantes se atribuyen sobre 1592 bultos de semilla de arroz paddy que fueron decomisados y destruidos por el ICA.  
(...)

Del análisis de conjunto de dicha prueba, no evidencia la Sala que los demandantes sean los dueños del arroz paddy incautado y destruido y a ello se suma que de las

manifestaciones que hicieron los dueños o administradores de los secaderos de arroz en sus descargos y en las actas de sellado del material vegetal, señalaron que los dueños o propietarios de dicho arroz no eran ellos sino agricultores de la zona, sin indicar los respectivos nombres o mencionar siquiera a los demandantes.

Estima la Sala que las citadas pruebas documentales permiten evidenciar que algunos de los demandantes se dedican a la agricultura, sin embargo, no son pruebas que acrediten la titularidad del derecho real de dominio o propiedad de los bultos de arroz objeto de este litigio, ni siquiera existe documento o recibo de depósito del material vegetal en los secaderos y/o depósitos “Pérez la 18”, “El Porvenir” y “El Olivo”.  
(...)

En esas condiciones, el análisis de conjunto de las pruebas recaudadas a la luz de la sana crítica no permite al tribunal señalar que hayan acreditado ser los propietarios del arroz paddy que fue decomisado y destruido por orden del ICA y, por consiguiente, no acreditaron el daño antijurídico necesario para que se pueda erigir la responsabilidad patrimonial que se reclama y por eso se negarán las pretensiones.”

[Sentencia del 03 de octubre de 2023, M.P: Jorge Alirio Cortés Soto, radicación: 41001233300020130024000](#)

### **NOTA**

La Relatoría es la encargada de clasificar, titular y extraer los autos y sentencias de la Corporación para organizar la jurisprudencia, pero advierte a sus usuarios que no se exoneran de verificar el contenido de lo publicado con los textos originales ubicados en la Secretaría del **Tribunal Administrativo del Huila**, o en el [aplicativo SAMAI](#).

### **CONTÁCTENOS**

**Tel. 8722638**

**Palacio de Justicia Neiva- Huila**

**Carrera 4 No. 6-99 Oficina 1108**

**Email: [reltadmnei@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:reltadmnei@cendoj.ramajudicial.gov.co)**

**<http://ramajudicialdelhuila.gov.co/newSite/administrativo/>**

**<https://www.facebook.com/tribunaladministrativodelhuila>**